

Héctor Tejera Gaona

Política del ritual y el ritual en la política: sobre la dinámica de los procesos electorales en México*

El pasado solamente permite entender el presente y elaborar la continuidad hacia el futuro, con base en una visión estática de la historia. Una situación similar resulta de adherirse a los esquemas explicativos actuales, que parecen resistirse a ser disueltos en el ácido de las sorpresas que las últimas elecciones nos han brindado, para convertirlos en la estrategia para abordar el futuro de los procesos políticos.

Se ha postulado que las elecciones y las movilizaciones asociadas a ellas pueden ser un marco inferencial para explicar cambios en la cultura política de los mexicanos. Desde esta perspectiva los resultados electorales —fraude aparte— marcan los contornos y las diferencias de nuestra sociedad. Sin embargo, sostener que los comicios son una ratificación de diversos proyectos sociales y, por tanto, al hablar de proyecto hacerlo de proyección, de tendencias por parte de quienes eligen entre un partido u otro, es un paso lógico pero no necesariamente correcto. En realidad, lo social desaparece bajo el voto,

* Ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993.

para convertirse en un resultado final sujeto a la inferencia de quien lo postula como un indicador de la voluntad social, asociándola implícitamente a un programa o proyecto político.

Si bien se acepta que el voto no agota y define el contenido de lo social, el análisis de los procesos electorales ha desplazado al estudio de la formación de las identidades políticas. La investigación sobre los procesos electorales es central, pero el énfasis en ella parece haber olvidado la dinámica sociocultural inserta en los procesos políticos. Algunas veces, el estudio de la política parece dirigirse más a establecer la distancia entre su institucionalización y los procesos reales, que a la explicación del carisma, la tradición, lo ingobernable y no reglamentado inscritos en ella. La cultura política se confunde con cultura cívica. También se adscriben propósitos manifiestos a las distintas identidades que actúan en el ámbito de la política. Con ello, sin embargo, los múltiples significados que los diversos grupos de la sociedad expresan a través de su voto, se simplifican con base en las características de los partidos y sus plataformas y proyectos.

Ante el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país, evidente en la multiplicidad de expresiones socioculturales y políticas que manifiesta, los análisis políticos se enfrentan a procesos regionales y estatales cuya diversidad ha puesto en crisis las posibilidades de generalización. Si la cultura es, fundamentalmente, un sistema significativo que se plasma en representaciones y prácticas sociales y aceptamos que ésta no es homogénea, el análisis de la acción política —como parte del proceso cultural— hace necesario reconocer su diversidad y heterogeneidad como punto de partida.

La diferencia de sentidos sociales que fundan múltiples identidades, se unen y dividen en facciones y grupos como resultado de la acción fluctuante del consenso y la generación de nuevas metáforas y sentidos. Los campos socioculturales de interacción social se modifican en los espacios de poder, en la lucha —como ha mencionado Bordieu— por el nombrar y clasificar.¹ Por

¹ Pierre Bordieu, "La ideología como representación", en Gilberto Giménez, *La teoría y el análisis de la cultura*, SEP/COMESU/ U. de G., México, 1987, p. 475 y ss.



Grabado de Leopoldo Méndez.

consecuencia, también las adscripciones políticas son dinámicas y cambiantes.

La cultura política en México se caracteriza más por ser cultura que política. La cultura está compuesta de elementos que no necesariamente hacen referencia a la racionalidad, a propuestas y programas. Sobre todo si por racionalidad entendemos no sólo la relación medios-fines, sino una evaluación de ambos. La misma propaganda del partido del Estado nos muestra que los programas o plataformas no son importantes. Hay que generar impacto, sentido múltiple como espacio cohesionador para obtener votos. No importa el contenido que cada uno de los votantes haya impreso a su voto. Lo fundamental es reunir mayoría para después elaborar, a

nivel discursivo, un voto traducido en apoyo que avale la permanencia de ciertos grupos en el poder. Lo formal se convierte en real y el Estado construye su propio consenso avalado en un proceso donde la sociedad no está necesariamente representada ni expresada. El enmascaramiento de las aspiraciones del electorado genera una caricatura de democracia: un espectáculo.

La participación electoral no necesariamente surge de la búsqueda de nuevas opciones o de la elección de las ya existentes. Puede ser simplemente resultado de la presión social, de la amenaza del retiro del beneficio social, de una resistencia a modificaciones en lo cotidiano, o de la aspiración de beneficios inmediatos en cualquier ámbito.

Son votos sustentados en el distanciamiento y el pragmatismo. También encontramos que la dinámica política da lugar a sectores que participan de utopías y espacios de "salvación" que ellos mismos generan. No son grupos institucionalizados —a los que generalmente se oponen y resisten— sino que se encuentran dispersos. La negativa de muchos de ellos a comprometerse de una forma u otra con la gama de partidos existentes en nuestro país, no es únicamente resultado de su desgaste, desprestigio y contradicciones sino que, además, proviene de la resistencia a la institucionalización y burocratización del porvenir. Asimismo, en este contexto, las dificultades para la generación de una democracia real, donde el juego

de partidos sea también expresión de la diversidad política de nuestro país, son resultado de las características del manejo político que tradicionalmente los ha reducido a un mero formalismo.

El poder del Estado no parece sustentarse en el apoyo efectivo que deviene del proceso electoral, sino en el establecimiento de un colectivo imaginario. No es un imaginario despreciable. Se basa en la acción de los medios de comunicación y la construcción de una especie de opinión pública que se refuerza, entre otras, por las encuestas como estrategia de validación y se complementa con los resultados oficiales. Pero siempre deja dudas —sobre todo ante la mayor presencia del electorado en el proceso comicial—, lo que lleva a situaciones como la de Guanajuato y San Luis Potosí que, por sus contornos de escándalo, requirieron de lo que Bordieu ha denominado un *rito de purificación*. Rito que “tiene como efecto reforzar la confianza colectiva por un instante amenazada, reafirmar la fe en los calores democráticos provisoriamente socavados, exorcizando el sacrilegio y restaurando el orden simbólico mediante la excomunión provisoria o definitiva del pecador”,² caso de la renuncia, por ejemplo, de Ramón Aguirre.

El carisma puede predominar sobre el proyecto político del partido que se representa, y ello pone en entredicho la propuesta racionalista o pragmática para explicar las preferencias o simpatías del electorado. En todos los estados donde se han efectuado elecciones en los últimos años, la eficacia discursiva ha estado íntimamente ligada a las personalidades de quienes lo emiten. El caso de Salvador Nava en San Luis Potosí, con su trayectoria opositorista, su discurso en

contra de la imposición desde el centro, y su crítica a la corrupción —muy similar al de Vicente Fox en Guanajuato— cohesionaron, como lo demostraron los comicios, a un buen número de electores. En el mismo caso encontramos a Barrio en Chihuahua. Todo ello, por encima de programas de gasto social y supercampanas sufragadas por el Estado.

El neopanismo que ha aglutinado a un sector importante de las clases medias del país encarna, entre otros, los nuevos valores culturales de la integración y la apertura al consumo del *mall*, del individualismo, el pragmatismo y el espíritu empresarial, el rechazo al centro y al Estado como burocracia, corrupción y límite a la iniciativa individual. El PAN representa la defensa y el mantenimiento de la tradición y el regionalismo propios a la clase media y media alta. En este contexto, es un partido que encarna valores cuyos contenidos no se contraponen al proyecto estatal, aunque sí a su hegemonía. Las estrategias electorales de Ruffo en Baja California y Barrio en Chihuahua pueden ubicarse en el ámbito de dichos valores y el éxito ha sido patente.

En cuanto al PRI, aunque también el PRD, observamos que postula, por ejemplo, a deportistas y actores cuya experiencia política puede fácilmente ponerse en duda, pero cuya presencia se ha constituido en imágenes y símbolos. No importa su proyecto político, sino lo que representan como individuos. Son las formas del juego, los significados atribuidos a los contendientes y en algunos casos, no muchos, sus ofertas —que frecuentemente rebasan el espacio propiamente legislativo y se ubican en el terreno de la gestoría o la promesa de ella— los que parecen favorecerlos. En otras palabras, no se busca la consecución de un proyecto previo, sino que se detectan las necesidades y se ajustan las ofertas.

La política negativa del PRD que se expresa en su resistencia a negociar con el Estado parece sustentarse en la estrategia probable de que ello conservará a este partido como estereotipo de una alternativa de oposición clara y sin ambages. No es una estrategia despreciable, aunque en estos momentos su costo político tampoco lo sea. Para el PAN, por el contrario, negociar ha tenido su precio en cuanto a su oferta política, no obstante la posibilidad que como partido ha tenido de ganar espacios.

Cuauhtémoc Cárdenas, más que el PRD, parece encarnar para muchos la herencia del proyecto revolucionario, los valores de la sociedad campesina y étnica trasladados del *Tata* a su hijo, y la aspiración a un retorno de los setenta por parte los sectores urbanos afectadas por el retiro del Estado benefactor y el actual realismo en el agro.

Ante el hecho innegable de que el neoliberalismo del actual sexenio ha socavado muchos de los principios subyacentes al nacionalismo revolucionario, el PRI no solamente ha enfrentado problemas de democracia interna, sino la disputa con el PRD por la bandera del proyecto revolucionario, de la lealtad de sus integrantes y de los favores del electorado. Es una lucha por la legitimación y, por tanto, de la herencia de mitos nacionales —construidos desde y a favor del Estado— como es el caso del cardenismo. Despojar al descendiente consanguíneo de la encarnación del mito —que se define en los contornos del Estado benefactor— fue y ha sido uno de los objetivos principales del discurso estatal. Por su parte, el discurso nacionalista como encarnación de otros tiempos futuros sustentados frecuentemente en el mito del pasado, ha influido para que amplios sectores de la población lo mantengan como la bandera para alcanzar muchas de sus aspiraciones. La disputa por la apro-

² Pierre Bordieu, “Anatomía del escándalo”, *La Jornada Semanal*, núm. 56, 8 de julio de 1990, p. 25.

piación, por la herencia, de los ideales de la Revolución, ha sido un ejemplo patente de la lucha por la constitución de identidades y adscripciones. Por la delimitación de las fronteras entre el “nosotros” y “otros”.

Si el cardenismo —ya como PRD— no ha recuperado el terreno electoral que obtuvo en las elecciones de 1988, probablemente ello se explique por su institucionalización, reciente creación, desorganización interna, la recomposición de sus alianzas con la oposición que lo acercan o alejan coyunturalmente del PAN en la lucha por la limpieza de los comicios electorales y las políticas asistencialistas del Estado, acompañadas de cierta estabilidad económica. No obstante el cardenismo podría continuar presente como símbolo de un México que, en términos del discurso estatal, podría llamarse tradicional.

El juego electoral se pretende como un espacio de institucionalización y legalidad. Por ende, de credibilidad y consenso. Sin embargo, en la práctica, la búsqueda de dicho consenso opera a través de acciones que tienden a reproducir el terreno de lo formal como sustento de la legitimación. La ley como garantía de racionalidad, como estructura y espacio renovador o generador de nuevas formas de consenso, se desgasta ante la negociación y el pragmatismo. Su fragilidad se debe a las decisiones del poder y el control de éste de la mayor parte del proceso electoral.

No obstante que asistimos a la presencia de múltiples grupos sociales que proponen y reclaman cambios en nuestro país como son el respeto al voto, los derechos humanos, la particularidad cultural, la ecología y la independencia del centralismo político y económico, sus demandas han sido en su mayoría asimiladas en el discurso estatal de la modernización.

Partiendo de premisas tales como el crecimiento del Estado corporativo y el incumplimiento de las demandas sociales que están íntimamente relacionadas, se justifica la necesidad de la descorporativización. Así, los reclamos de la sociedad se incorporan al discurso del encanto del mercado y sus fuerzas como propiciatorias de la justicia social. Las críticas al paternalismo y los reclamos de fin a la ineficiencia y el burocratismo de las instituciones gubernamentales, se han ubicado en el proceso de “redimensionamiento” del Estado a partir de la venta de empresas y la denominada “transferencia de funciones”. Nos enfrentamos a la modificación de los sentidos para lograr su integración a la estrategia estatal, a la transformación del discurso revolucionario como discurso neoliberal.

Es claro que la transición a la democracia no será el resultado de la formación de una cultura política racionalista en México, pero el electorado puede ser consecuente con los deseos y principios que determinan sus elecciones partidistas a través del voto emitido, por medio del cual pretende expresar sus preferencias. Ello es obvio cuando se defienden los resultados electorales contrarios a los designios y avatares de la democracia selectiva.

En el ámbito político presenciamos dos discursos paralelos, el de las identidades colectivas y el del Estado. Discursos cuyo punto de interacción se ubica en el proceso electoral, pero en cuyas características se encuentran los mecanismos para formar una sociedad imaginaria. La que se edifica a través del voto fraudulento y de campañas corporativas o sustentadas en el espejismo del discurso autocomplaciente. La apuesta es a que esta sociedad se impondrá a la real, la cotidiana. Sin embargo, ésta se enfrenta, cada vez más, a dificultades a

consecuencia de quienes insisten en imprimirle validez a sus resultados y ante la defensa de una legalidad creada con otros propósitos: generar el imaginario social de la existencia de la democracia. El ritual ha comenzado a ser apropiado por sectores cada vez más importantes de la sociedad, en tanto estrategia para la validación de su presencia en la escena política del país. De esta manera, el paso de la hegemonía a la mayoría ha hecho necesario un nuevo proyecto estatal que amplíe los espacios para crear nuevos carismas que garanticen la continuidad de la política económica iniciada en el sexenio anterior. Es en este contexto donde las posibilidades de modernidad y de apertura política parecen condenadas al estancamiento. La tendencia apunta a la continuidad y profundización de tal estrategia, a pesar de que los cambios políticos no lleven el mismo ritmo. Para ello, encontramos el fortalecimiento del presidencialismo a partir de acciones de advertencia ejemplar; la asimilación y reorganización de las demandas sociales dentro del discurso de la modernidad sustentado por el Estado; la negociación de una reforma electoral; la organización de elecciones sujetas, en la práctica, a que los electores defiendan el voto, y el establecimiento de un área social en el gasto público de lógica compensatoria sujeta directamente a control presidencial.

Los sujetos sociales —después de los comicios— quedan sin medios para objetar los actos de gobierno, pero su respuesta intentará volverse a manifestar en las elecciones por venir. Los reclamos y acciones para que el voto se respete pueden ser la garantía de que dicha respuesta incida con eficacia sobre el curso de la modernidad y la modernización, sobre un sistema político democrático o autocrático.